

# **La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco**

## **Sanciona con Fuerza de Ley Nro. 714-F**

### **(Antes Ley 3730)**

**Artículo 1°:** Dispónese la consolidación de las obligaciones vencidas o que tuvieran causa o título, anteriores al 1° de abril de 1991, y que consistan en pagos de sumas de dinero o que se resuelvan en pagos de sumas de dinero y que respondan al relevamiento de la deuda del Estado Provincial, sus entes autárquicos o descentralizados, Empresas del Estado Provincial, Sociedades de Economía Mixta, financieras o no, y a toda otra obligación que por cualquier acto o hecho jurídico, deberán ser atendidos con recursos pertenecientes a los mismos.

La consolidación dispuesta por el presente artículo alcanza a las obligaciones accesorias a una obligación consolidada.

**Artículo 2°:** Las deudas cuyo relevamiento haya dispuesto o disponga el Poder Ejecutivo y las presentaciones registradas por los acreedores, ante cada jurisdicción de acuerdo a las instrucciones generales de la Contaduría General de la Provincia y por los montos resultantes de las mismas, serán informadas por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en un plazo de noventa (90) días desde la promulgación de la presente.

**Artículo 3°:** Dispónese la intervención necesaria de la Contaduría General de la Provincia y del Tribunal de Cuentas, siendo autoridad de aplicación el Ministerio de Hacienda y Finanzas, con dictamen de la Asesoría General de Gobierno.

La Cámara de Diputados efectuará el contralor político de los actos cumplidos al amparo de la presente, para lo que será informada por el Poder Ejecutivo dentro de los sesenta (60) días de cada uno de los casos resueltos, con los antecedentes respectivos.

**Artículo 4°:** Las sentencias judiciales, resoluciones administrativas firmes, los acuerdos transaccionales y los laudos arbitrales que reconozcan las obligaciones cuya consolidación se dispone, o que hubieren dispuesto con anterioridad a esta ley, tendrán carácter meramente declarativos, con relación a los sujetos del artículo 1° de la presente ley, entendiéndose como limitados al reconocimiento del derecho que se pretenda, siendo la única vía para su cumplimiento lo establecido en la presente. Dispónese el efecto retroactivo de esta ley, de conformidad al artículo 3° del Código Civil de la Nación.

**Artículo 5°:** Las obligaciones referidas en los artículos 1° y 2° solo quedarán consolidadas luego de su reconocimiento firme en sede judicial o administrativa.

El acreedor cuyos créditos queden sometidos al régimen de la presente ley, podrá liberarse de sus deudas respecto a los profesionales que hubieran representado o asistido a las partes en el juicio o en las actuaciones administrativas correspondientes, y respecto a los peritos, en su caso, mediante cesión por su valor nominal de los derechos emergentes de esta ley, respetando en su caso la proporción de lo percibido en títulos o en efectivo.

Quedan excluidos del régimen de la presente ley los siguientes casos:

- a) Las obligaciones que correspondan a deudas corrientes, aun cuando se encuentren en mora;
- b) el pago de las indemnizaciones por expropiación por causa de utilidad pública o por desposesión ilegítima de bienes así declaradas judicialmente con sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada;
- c) los créditos por daños y perjuicios por daños a la vida, en el cuerpo o en la salud de las personas físicas o por privación o amenaza a la libertad o daños en cosas que constituyen elementos de trabajo o vivienda del damnificado hasta el monto de pesos cien mil (\$ 100.000). Los saldos que superen esa cifra y por el excedente que fuere tendrán el tratamiento que impone esta ley, de acuerdo al orden de prelación establecido en el artículo 9°;
- d) los aportes previsionales y beneficios jubilatorios.

El pago de las sumas no consolidadas se hará en ocho (8) cuotas trimestrales, con seis (6) meses de gracia, desde que quedara firme la liquidación

**Fuente: Dirección de Información Parlamentaria** Güemes 120 - 5° Piso

T.E.: 0362 - 4441467 - Internos: 194-200 - Centrex: 41467

Email: [dir.informacionparlamentaria@legislaturachaco.gov.ar](mailto:dir.informacionparlamentaria@legislaturachaco.gov.ar)

ES COPIA DIGITAL

administrativa o judicial, con una tasa de interés similar la tasa promedio para operaciones pasivas suministrada por el Banco Central de la República Argentina, o su equivalente. Exceptúase del presente párrafo, los que a la fecha de la sanción de esta ley tengan sesenta (60) años de edad, a quienes se les pagará en cuatro (4) cuotas trimestrales con seis (6) meses de gracia.

- e) Las obligaciones que hayan sido asumidas por el sector público comprendidas en el artículo 1° de esta ley, surgidas de convenios internacionales.

**Artículo 6°:** Los representantes judiciales de las personas jurídicas u organismos alcanzados por el artículo 1°, solicitarán dentro de los cinco (5) días de entrada en vigencia la presente ley, el levantamiento de todas las medidas ejecutivas o cautelares en su contra. Dicho levantamiento deberá disponerse sin sustanciación y con habilitación, sin costas, ni aportes de los profesionales intervinientes, labrándose incluso los depósitos de sumas de dinero y librándose otros bienes o valores que hubiesen sido alcanzados por las suspensiones dispuestas por la legislación de emergencia.

Los jueces no podrán en el futuro disponer la traba de medidas cautelares o ejecutorias respecto de las obligaciones consolidadas conforme a esta ley.

**Artículo 7°:** Para solicitar el pago de las deudas que se consolidan, los titulares de los derechos que hayan sido definitivamente reconocidos, deberán presentar la liquidación judicial aprobada y firme de sus acreencias, o la liquidación administrativa definitiva que cuente con la previa conformidad del Tribunal de Cuentas, del Sindicato General de Empresas del Estado, Contaduría General de la Provincia, y de los organismos de control internos correspondientes, expresada en australes al 1° de abril de 1991, en la forma y condiciones que determine la reglamentación. Las deudas que mantiene el Estado Provincial y/o los entes enumerados en el artículo 1° de la presente, entre sí y que correspondan su consolidación, podrán ser sometidas a arbitraje en el modo que determine la reglamentación, debiendo ser los gastos y costas del procedimiento por el orden causado. El sometimiento a arbitraje, no impedirá a las partes llegar a un acuerdo consensuado, el que de ocurrir, tendrá efecto de un reconocimiento firme administrativo mediando la participación del Organismo de Aplicación del Tribunal de Cuentas, Contaduría General de la Provincia con dictamen favorable de la Asesoría General de Gobierno.

Durante el plazo del arbitraje se suspenden todos los términos legales y procesales que pudieron relacionarse con las acciones llevadas a cabo por las partes de dicha cuestión, ya sea en sede administrativa o judicial.

**Artículo 8°:** En base a las liquidaciones recibidas las personas jurídicas u organismos comprendidos en el artículo 1° de la presente ley, cuando fuere pertinente, formularán el requerimiento de créditos presupuestario al Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos, que los atenderá exclusivamente con los recursos que a los efectos disponga la Legislatura Provincial en la ley de presupuesto de cada año, siguiendo el orden cronológico y el rango de preferencia que se establece en la presente ley. Cada crédito presupuestario que se asigne, deberá corresponderse con un débito equivalente a cargo de la persona jurídica u organismo de que se trate, que se cancelará en condiciones análogas a las obligaciones consolidadas salvo que el Poder Ejecutivo Provincial disponga capitalizar dichas acreencias en cada caso, total o parcialmente. A partir de la consolidación de pleno derecho operada de conformidad a lo dispuesto en la presente ley, las obligaciones consolidadas devengarán solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común, que publica el Banco Central de la República Argentina capitalizable mensualmente.

**Artículo 9°:** Los recursos que anualmente asigne el presupuesto de la Provincia para atender el pasivo consolidado del Estado Provincial, se imputarán al pago de los créditos reconocidos de acuerdo al siguiente orden de prelación:

- a) Toda prestación de naturaleza alimentaria, créditos laborales o nacidos con motivo de la relación de empleo público y los créditos derivados de trabajo o

- la actividad profesional hasta el monto de australes cien millones (A 100.000.000) por persona y por única vez;
- b) los créditos por daños a la vida en el cuerpo o en la salud de personas físicas o por privación ilegal de la libertad o daños en cosas, que constituyan elemento de trabajo o vivienda del damnificado hasta la suma de australes quinientos millones (A 500.000.000) por persona y por única vez;
- c) los saldos indemnizatorios que hubieran sido controvertidos, por expropiación por causa de utilidad pública o desposesión ilegítima de bienes sin sentencia firme a la fecha de sanción de la presente;
- d) las repeticiones de tributos;
- e) los créditos mencionados en los incisos a), b) y c) precedentes por los excedentes al límite antes mencionado;
- f) los aportes y contribuciones previsionales para obras sociales en favor de los sindicatos;
- g) las demás obligaciones alcanzadas por la consolidación.

**Artículo 10:** Dentro de las categorías del artículo 9º la prioridad de pagos se asignarán respetando el orden cronológico de las fechas en que hubieren quedado firmes y definitivos los actos judiciales o administrativos que reconocieran el crédito líquido.

**Artículo 11:** En todas las causas judiciales de las que emerjan obligaciones alcanzadas por la consolidación, se tendrán como plazo máximo para el cumplimiento de las mismas en las condiciones de esta ley, el de dieciséis (16) años para las obligaciones generales. A solicitud de partes, los jueces podrán requerir al Poder Ejecutivo Provincial o a las entidades consignadas en el artículo 1º, según sea el caso, se informe el orden cronológico de prelación y grado preferencial del crédito pretendido hasta la fecha del informe.

A ese efecto, el oficio respectivo deberá consignar el monto definitivo de la obligación consolidada en la forma prevista en la presente ley, naturaleza y fecha de origen de la misma y todo otro dato o circunstancia que permita su encuadramiento a los fines de dar cumplimiento al requerimiento.

El Poder Ejecutivo propondrá a la Legislatura que vote anualmente los recursos necesarios, para hacer frente a los pasivos consolidados al 1º de abril de 1991, de conformidad a la presente.

**Artículo 12:** Los acreedores del Estado Provincial podrán optar en forma alternativa, a la manera de cancelación de sus acreencias previstas en esta ley, por la suscripción de su valor nominal de los bonos de consolidación que oportunamente emita o suscriba el Poder Ejecutivo con el Tesoro Nacional. Asimismo podrán optar por recalcular su crédito para reexpresarlos en dólares y valorizando al tipo de cambio vendedor en el mercado libre o su equivalente que corresponda a la fecha de origen de la obligación, con el fin de suscribir con tal crédito reexpresado en dólares bonos de consolidación emitidos o suscriptos de esa moneda. Todo ello en las condiciones que determinen las reglamentaciones.

**Artículo 13:** Facúltase al Poder Ejecutivo a emitir los bonos de consolidación y/o suscribir bonos con el Tesoro Nacional, hasta la suma necesaria para atender las solicitudes de suscripción presentadas correspondientes a montos de deudas consolidadas y definitivamente, reconocidas. Los mencionados bonos tendrán el tratamiento fiscal que se determina en el artículo 21.

También podrá disponer la emisión de bonos de consolidación, en las condiciones previstas en la presente ley, para atender obligaciones no consolidadas, o de causa o título de fecha posterior a la indicada en el artículo 1º, cuando se cuente con la conformidad expresa del acreedor para recibir en pago dichos títulos, con efecto cancelatorio en su valor nominal a la par.

**Artículo 14:** Los bonos de consolidación emitidos por el Poder Ejecutivo, serán a dieciséis (16) años de plazo. Durante los seis (6) primeros años los intereses se capitalizarán mensualmente, y a partir del séptimo año el capital acumulado y su renta se amortizarán mensualmente, en la forma y condiciones que determine la reglamentación. El Poder Ejecutivo

Provincial podrá ejercer la facultad de rescatarlos anticipadamente, manteniendo las prioridades establecidas en el artículo 9. Deberá Identificarse y registrarse al titular original del crédito, pero serán transferibles libremente. Podrán emitirse nominativamente pero circularán al portador y cotizarán en las bolsas y mercados del país o del exterior. Los acreedores que mantengan la liquidación de sus acreencias en moneda nacional, podrán suscribir bonos de consolidación en moneda nacional, en cuyo caso devengarán la tasa de interés promedio de caja de ahorro que publique el Banco Central de la República Argentina, y aquellos que reliquiden sus acreencias en dólares estadounidenses podrán suscribir bonos de consolidación en dicha moneda, en cuyo caso devengarán la tasa libor para depósitos a treinta (30) días de plazo.

**Artículo 15:** Los suscriptores originales de los bonos de consolidación podrán cancelar a la par, con los bonos que reciban en pago de sus acreencias, las deudas vencidas o refinanciadas con anterioridad al 1° de abril de 1991, que ellos o cualquiera de los integrantes de un mismo grupo o conjunto económico, definido en las condiciones que determina la reglamentación, tuvieren con cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 1° de la presente ley, hayan sido o no reconocidos administrativamente o judicialmente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, con excepción de las deudas impositivas, previsionales, aquellas derivadas de sanciones pecuniarias y las mantenidas con el Banco del Chaco S.E.M.. El Poder Ejecutivo Provincial establecerá un plazo que no excederá de los ciento ochenta (180) días desde la vigencia de la ley, hasta cuyo vencimiento los tenedores de bonos de consolidación podrán optar por cancelar a la par, las deudas impositivas al 1° de abril de 1991, y sus accesorios de actualización de intereses devengados hasta dicha fecha, que constituyan obligaciones comprendidas en determinaciones y liquidaciones efectuadas por la Dirección General de Rentas y que se encuentren en discusión administrativa, contencioso administrativas o judicial a la fecha de publicación de la presente ley, con exclusión de las indicadas en el párrafo siguiente. La utilización de los bonos para la cancelación de las deudas a las que se alude precedentemente requerirá que simultáneamente los responsables se allanen y renuncien expresamente a toda acción y derecho, incluso el de repetición, relativos a la causa, y en su caso abonar las costas del juicio en la forma y condiciones que dispongan los mencionados organismos.

Quedan excluidas las obligaciones que correspondan:

- a) A los contribuyentes y responsables contra quienes existieran denuncia formal o querrela penal por los delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros;
- b) a las obligaciones que se indican en el inciso anterior cuando su incumplimiento guarden relación con los delitos comunes que fueran objeto de causa penales o las que se hubieran ordenado el procesamiento de funcionarios o ex-funcionarios estatales;
- c) a las actualizaciones, los intereses, las sanciones y los accesorios correspondientes a los conceptos mencionados en los incisos anteriores. Los suscriptores originales podrán cancelar con dichos títulos a la par:
  - 1) los impuestos provinciales cuyo hecho imponible se perfeccione en razón del cobro de los créditos consolidados en bonos;
  - 2) las obligaciones propias comprendidas en los dos primeros párrafos de este artículo aún cuando se determinen o liquiden por los organismos mencionados con posterioridad a la vigencia de la ley. En este caso el plazo para la opción regirá a partir de la fecha de determinación o liquidación administrativa y será de aplicación lo previsto en cuanto a allanamiento, renuncia o pago de costas.

Los bonos de consolidación no podrán aplicarse al pago de deudas impositivas a cuya cancelación se hubieran imputado o imputen créditos fiscales, propios o recibidos por transferencia de terceros, en cuanto dichos créditos fueren objeto de impugnación o cuestionamiento por parte de la Dirección General de Rentas.

**Artículo 16:** El Estado Provincial o cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 1°, deberán aceptar el pago de los créditos a su favor con bonos de

consolidación, en las condiciones previstas en los artículos anteriores. El Ministerio de Hacienda y Finanzas cancelará los débitos que resulten a cargo de las personas jurídicas u organismos alcanzados por la consolidación.

Asimismo realizarán bienes, créditos en la gestión y mora, al 1° de abril de 1991, acciones o empresas sujetas a privatización, mediante procedimiento de licitación o remate al mejor postor, pagaderos en bonos de consolidación en forma equivalente, y ello en las condiciones y proporciones que determine la reglamentación en general o en especial.

**Artículo 17:** La presente ley, es de orden público y se dicta en ejercicio de los poderes de emergencia propias de la legislatura provincial, la disponibilidad de los recursos fiscales correspondientes resulta esencial para atender la totalidad de las acreencias reconocidas u obligaciones consolidadas por la presente ley o que se reconozca en el futuro en contra de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 1°.

No se aplicarán a las obligaciones consolidadas ni a sus accesorios las disposiciones contenidas en las leyes especiales en tanto se contrapongan con lo normado, en la presente ley. No serán exigibles a los titulares de créditos consolidados el cumplimiento de sus obligaciones accesorias a dicho crédito, sino en las condiciones de esta ley.

**Artículo 18:** La consolidación legal del pasivo público alcanzado por la presente, implica la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios, así como la extinción de todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones por parte de cualquiera de las personas jurídicas y organismos comprendidos en el artículo 1° pudiera provocar o haber provocado. En lo sucesivo solo, subsisten a su respecto los derechos derivados de la consolidación. Asimismo, la cancelación de obligaciones con cualquiera de los bonos de consolidación creados por la presente ley, extinguirá definitivamente las mismas.

**Artículo 19:** En los casos en que hubiere sentencia o laudo arbitral, el Poder Ejecutivo Provincial o el Ministerio de Hacienda y Finanzas, con el previo asesoramiento de la Asesoría General de Gobierno, podrán acordar transacciones que en todos los casos deberán contar con la aprobación de Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas de la Provincia, la Sindicatura General de Empresas Públicas y los organismos de contralor preventivo que corresponda en cada caso, y ser homologados judicialmente. Será competente para la homologación, el juez actuante o el que correspondiere en razón de turno, materia y jurisdicción. Los medios para la cancelación de las obligaciones dinerarias emergentes de la transacción, serán los previstos por esta ley, salvo que existieren partidas presupuestarias específicas.

El Poder Ejecutivo Provincial o el Ministerio de Hacienda y Finanzas, con los recaudos y la participación de los organismos indicados en el párrafo precedente, podrán someter a arbitraje las controversias que mantenga con los particulares en sede administrativa o judicial, cuando los asuntos revistan significativa trascendencia o sea ello conveniente para los intereses del Estado. En el compromiso arbitral se pactará las costas, por su orden, y se renunciará a todo recurso con excepción de los extraordinarios, tanto local como federal. Los medios para la cancelación de las obligaciones dinerarias emergentes del laudo, serán los previstos por esta ley, salvo que existieren partidas presupuestarias específicas. El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará lo relativo a transacción y arbitraje a los fines de esta ley.

**Artículo 20:** A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo Provincial deberá comunicar a la Legislatura todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes, de obligaciones de causa o título posterior al 1° de abril de 1991, que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinarias de la legislatura en el que debiera haberse tratado la ley de presupuesto que contuviere el crédito presupuestario respectivo.

**Artículo 21:** Los bonos de consolidación quedarán exentos de todo impuesto provincial creado o a crearse.

**Artículo 22:** Facúltase al Poder Ejecutivo, a consolidar la deuda del sector público con el Banco del Chaco S.E.M. emitiendo y/o suscribiendo con el Tesoro Nacional bonos de la deuda pública interna para atender las deudas con dicha entidad, devengadas hasta el 31 de marzo de 1991.

**Artículo 23:** El bono cuya emisión se autoriza se denominará bono de saneamiento financiero CHACO –BOSAFI CHACO–, teniendo las mismas características que las establecidas en el artículo 14 de la presente, emitiéndose en dólares estadounidenses.

El vencimiento de la primera cuota de amortización operará a los seis (6) años de su emisión.

**Artículo 24:** El bono devengará una renta equivalente a la tasa libor de interés, la cual se abonará por períodos mensuales vencidos, operando el primer vencimiento a los seis (6) años de su emisión.

**Artículo 25:** Sin perjuicio de la responsabilidad general de la provincia, aféctase al pago de los servicios de rentas y amortización de los bonos cuya emisión se autoriza por la presente ley, la coparticipación federal de impuestos que corresponde a la provincia del Chaco debiendo respetarse el límite máximo previsto en el artículo 59 de la Constitución Provincial en materia de Crédito Público.

**Artículo 26:** Invítase a los Municipios de la Provincia del Chaco a adherirse a la presente ley.

**Artículo 27:** Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley N° 714-F (Antes Ley 3730)  Tabla de Antecedentes	
Artículo del Texto Definitivo	Fuente
1, 1er párrafo	Texto original
1, 2do párrafo	Ley 3796. Art. 1°
2/4	Texto original
5 incs. a) / d)	Ley 3796 art. 2°
5 inc. e)	Ley 3809 art. 1°
6/12	Texto original
13	Texto original
13 último párrafo	Ley 4691 art. 1°
14	Ley 4267 art. 1°
15/22	Texto original
23/24	Ley 4267 art. 1°
25/27	Texto original

Artículo suprimido:  
Anterior art. 26 por objeto cumplido

Ley N° 714-F (Antes Ley 3730)  Tabla de Equivalencias		
Número de artículo del Texto Definitivo	Número de artículo del Texto de Referencia (Ley 3730)	Observaciones
1/25	1/25	
26/27	27/28	